

DG-100-0215

Manizales, mayo 06 de 2020

Señores
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
Palacio de Justicia Fanny González Franco
Carrera 23 No. 21-48
Manizales (Caldas)
pcto04ma@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia:	CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA.
Radicación:	17001-31-04-004-2020-00043-00
Accionante:	JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARIA
Accionada:	DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), manifiesta al Honorable Despacho Judicial que en atención al asunto de la referencia notificado el 04 de mayo de 2020, se permite contestar la Acción de Tutela en los siguientes términos:

CUESTIONES PRELIMINARES:

Si bien el accionante manifiesta que su pretensión no es cuestionar la Resolución No. 0170 del 12 de marzo de 2020, mediante la que se suspende el nombramiento y posesión en el empleo público en el cual ocupó el primer lugar, de los hechos y pretensiones incoadas en la acción de tutela, se evidencia que su finalidad intrínseca es la nulidad del mencionado acto administrativo.

En materia de actos administrativos de contenido particular y concreto, la jurisprudencia ha establecido que la acción de tutela no es procedente para controvertir actos administrativos toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación de los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Y más aún cuando en el presente caso, no es posible evidenciar en cabeza de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (de aquí en adelante DTSC), un actuar de mala fe en la gestión administrativa y jurídica que rodea el proceso de nombramiento y posesión en los cargos públicos provistos en virtud del concurso de méritos, ni dilaciones arbitrarias, tal y como lo pretende mostrar el accionante sin evidencia probatoria. Por el contrario, todas y cada una de las actuaciones desplegadas por la DTSC en relación a la provisión de empleos de carrera administrativa han sido ajustadas a la normatividad aplicable, prueba de ello se evidencia en cada uno de los actos administrativos expedidos por la entidad en donde de manera taxativa de plasma la normativa que corresponde.

A LOS HECHOS:

Respecto a los hechos manifestados por el accionante, la mayoría de ellos se encuentran revestidos de conjeturas y suposiciones, carecen de argumentos seguros y de material



Certificate No.
LAT - 0915

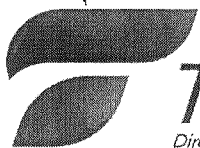


Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co





probatorio que los soporte. Incluso subraya y resalta en los mismos, la suposición y presunción de cada uno. Situación entonces, que altera la veracidad y sinceridad de la vulneración de derechos fundamentales y la inmediatez de los mismos, pues se recalca que no existe un riesgo concreto, serio, claro y discernible extraíble de la suspensión del nombramiento en virtud de hechos particulares y manifiestos que se expondrán más adelante; por el contrario, es evidente que el acto administrativo de suspensión del nombramiento, lo que pretende es blindar la actuación de la administración como nominadora para no incurrir en violación al régimen disciplinario y de carrera administrativa al efectuar nombramiento y posesión de un elegible, amparándome en el debido proceso constitucional, legal y reglamentario.

Por ello y ante las múltiples suposiciones abstractas del contenido fáctico, esta entidad se atiene a lo que resulte probado dentro del trámite constitucional.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

De acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política el acceso a los empleos en órganos y entidades del Estado se hace por medio de la carrera administrativa, salvo aquellos que sean de elección popular, de libre nombramiento y remoción, y las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Se busca que quienes accedan a los puestos del Estado sean servidores con experiencia, conocimiento, y dedicación, de manera que se garantice la efectividad del Estado en el cumplimiento de sus funciones, buscando la excelencia a través del mérito.

Así las cosas, se ha entendido que *"El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, apartándose en esa función de consideraciones subjetivas, de preferencias o animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole."*

Respecto a la manifestación que realiza el accionante, en repetidas ocasiones, sobre el derecho adquirido, se tiene que:

La Constitución Política de Colombia de 1991, en forma clara y expresa se refirió a los derechos adquiridos en el artículo 58 de la siguiente manera:

"Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social (...)"

Al respecto y considerando una especial excepción, ha definido la Corte Constitucional, que por derechos adquiridos:

"(...) se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido



Certificate No.
LAT - 0913



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

gml

constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder.¹²

Conforme a lo anterior y en primer lugar, es preciso manifestar que no existe por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, un desconocimiento de los derechos adquiridos del accionante, el señor Juan Carlos Neira, pues desde el inicio de la convocatoria y el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, esta entidad ha estado presta a cumplir, acatar y apoyar la ejecución del mismo, garantizando los derechos de los participantes, de los elegibles, de los provisionales y también el interés colectivo como finalidad última de esta entidad rectora del Sistema de Salud en el Departamento de Caldas.

Así entonces, no es fiel afirmar que existe un desconocimiento del derecho adquirido, toda vez que la realización del respectivo nombramiento y posesión no ha sido ignorado ni pasado por alto por parte de esta entidad, pues el mismo ha sido tratado de manera igualitaria a los demás empleos, conforme a las vacantes sometidas a concurso de méritos. Al respecto, se debe expresar, que dicho nombramiento, se encuentra actualmente en suspenso, por situaciones de interés colectivo y público, que afectaban la transparencia e igualdad del proceso, tal y como se manifestó y comunico al accionante a través de la Resolución No. 0170 del 12 de marzo de 2020. Téngase en cuenta que este no es el único nombramiento que fue suspendido, como se puede verificar en la Resolución 169 del 12 de marzo de 2020, la cual, con fundamento en las mismas normas pero con base fáctica diferente, suspendió el proceso de nombramiento y posesión de otro cargo.

Ante la información presentada a esta entidad (conocimiento de denuncia ante la Fiscalía General de La Nación) y el juicio de reproche que fuese expuesto respecto a la fidelidad y veracidad de los soportes aportados por el accionante para acreditar los requisitos para la provisión del empleo, se encontraba esta entidad pública en la posición jurídica y legal de determinar la viabilidad de realizar el nombramiento y posesión en un cargo público de interés colectivo para el Departamento, frente al cual existen planteamientos formales de la presunta comisión de un delito, lo que constituye una duda razonable frente al acto de nombramiento y posesión del elegible, que al día de hoy se encuentra en averiguación para adoptar una decisión de fondo.

La Corte Constitucional de Colombia a través de la sentencia C-1177 de 2005 ha definido que la denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo con expresión detallada de las circunstancias que le consten de tiempo, modo y lugar para poner en funcionamiento el aparato judicial.

Ligado a ese concepto está el deber de denuncia que está contemplado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y que genera que *"toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio"*.

Adicionalmente la norma trae una previsión especial respecto de los funcionarios oficiales que señala que *"el servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba*

² Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, D. E. Sentencia del 17 de marzo de 1977, MP Guillermo González



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

32nd

investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.³

Así, y de acuerdo con las normas señaladas, todas las personas en el país tienen la obligación jurídica de cooperar con las autoridades para comunicarles hechos que puedan originar la apertura de un proceso penal, siendo de manera más estricta el deber legal en cabeza de los servidores públicos, y en este caso como nominador.

Razón anterior por la cual, ante el conocimiento de dicha denuncia, esta entidad y sus funcionarios en cumplimiento de sus deberes legales, ante la duda razonable, deciden suspender temporalmente el proceso de nombramiento y posesión, término durante el que de manera sumaria, esta entidad se encuentra realizando una verificación de los requisitos, a través de un repaso y comprobación de los documentos aportados, y su correspondiente validación para lograr un grado de certeza que nos permita adoptar una decisión de fondo; actuación que se encuentra respaldada por la normatividad, pues, de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, **antes que se efectúe el nombramiento, verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales. (snft)**

Se insiste entonces, que no se trata de una situación en la cual esta entidad por simple arbitrio decide suspender el nombramiento. Ante la formalidad y materialización de la denuncia y con la finalidad de evitar la ilegalidad del acto administrativo por quebranto al ordenamiento jurídico, esta entidad en amparo de derechos colectivos, del interés general traducido en la protección del patrimonio y de la función pública, obrando conforme al principio de buena fe determina la suspensión ya mencionada de manera transitoria en amparo del artículo 6 de la constitución política.

En el proceso de suspensión, esta entidad ha desplegado una gestión, en aras de verificar la fidelidad de los documentos aportados, para posteriormente certificar la provisión del cargo público, todo ello ha sido adelantado con sujeción de las disposiciones jurídicas y en garantía absoluta de los derechos fundamentales del señor Juan Carlos Neira, en especial en procura de la garantía del debido proceso, no solo para el accionante, sino también para la entidad accionada.

Conforme a ello, esta entidad en virtud del derecho de petición, elevó ante diferentes entidades y empresas la confirmación o cotejo del contenido de los certificados en tela de juicio, mismos que a la fecha de presentación de esta respuesta no han sido contestados.

De esta manera, ante una presunta irregularidad de los documentos aportados por el señor Juan Carlos Neira para acreditar el cumplimiento del requisito de experiencia exigido en la OPEC del empleo al cual se inscribió y que fuese puesta en conocimiento a esta entidad en la etapa previa al nombramiento en el empleo, se hace necesario, en virtud de los principios de transparencia y moralidad administrativa, establecer si efectivamente existe una presunta anomalía, buscando establecer la certeza de que el nombramiento responde a los principios de mérito, igualdad y demás postulados propios de los procesos de selección; veamos:

“(…) La moralidad administrativa, como tantas veces se ha reiterado por la jurisprudencia y la doctrina, para el caso del ordenamiento jurídico colombiano, presenta dos diferentes rangos normativos: i) como principio de la función administrativa (art. 209 C.P.) y, ii) como derecho de naturaleza colectiva (art. 88 C.P.). I) Como principio de la función

³ Artículo 67 de la Ley 906 de 2004.



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co



administrativa, debe entenderse como aquél parámetro normativo de conducta ética que radica, en cabeza de todos los funcionarios, servidores públicos y particulares que ejercen función administrativa, una obligación axiológica y deontológica de comportamiento funcional según los postulados de la honradez, pulcritud, rectitud, buena fe, primacía del interés general y honestidad, sobre las cuales existe un consenso, por parte del conglomerado social, en un período de tiempo determinado.”⁴

La actuación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas se ajustó a la normatividad Colombiana y en específico a la reglamentación del concurso y las disposiciones guiadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien expresamente en la Resolución No. CNSC – 20202230028095 del 14 de febrero de 2020, por medio de la cual se conformó y adoptó la lista de elegibles, indicó en el parágrafo del artículo segundo que:

“(…) Parágrafo. Corresponde al nominador, antes de efectuar el nombramiento o dar posesión, verificar el cumplimiento de los requisitos de las personas designadas para el desempeño de los empleos, según la Constitución, la ley, los reglamentos y el Manual de Funciones y Competencias Laborales utilizado para la realización de este proceso de selección (…)”.

No se vislumbra en el actuar de esta entidad una actuación arbitraria que desconozca los principios que busca proteger el criterio de la carrera administrativa en el Estado Colombiano, y que impida caprichosamente, el acceso al cargo público. Por el contrario, siempre ha estado enfocada a garantizar la transparencia y el mérito. En ese sentido, la Dirección Territorial de Salud de Caldas se encuentra legitimada para verificar el cumplimiento o no de los requisitos exigidos para el acceso al cargo público adelantado en Concurso, sin que con ello violente derecho alguno del accionante, por el contrario, lo que se busca es proteger los derechos fundamentales no solo del accionante, sino salvaguardar la moralidad administrativa y los principios estipulados en el artículo 209 de la Constitución Nacional.

Por último, se deja constancia que por medio de la Resolución 278 del 06 de mayo de 2020 la DTSC, dio respuesta de fondo al señor Juan Carlos Neira frente al recurso de reposición que presentó frente a la Resolución 170 del 12 de marzo de 2020, notificando este acto administrativo al correo electrónico que para estos trámites habilito el recurrente, de lo cual se aporta evidencia.

PETICIÓN

Señora Juez, de acuerdo con los planteamientos expresados en la presente contestación, respetuosamente, considero que las pretensiones enlistadas en el libelo introductorio de la tutela no están llamadas a prosperar en contra de la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** por cuanto la DTSC no ha violentado derecho fundamental alguno, adicionalmente no se cumple con los requisitos de la acción de tutela como son, la subsidiariedad y residualidad, sin que exista para su procedencia de manera excepcional un perjuicio irremediable.

Epítome de lo expuesto, solicito que se declare en la presente acción constitucional las siguientes excepciones: **INEXISTENCIA DE CONCULCACIÓN DE DERECHOS**

⁴ Sentencia 540 de 2011 Consejo de Estado



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

spk

**FUNDAMENTALES, INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.**

Finalmente, se solicita **VINCULAR AL PRESENTE TRAMITE A FREDDY DAVID QUIROGA PÁEZ**, según las manifestaciones del actor, teniendo en cuenta que con el resultado de este proceso se puede ver afectado, para ello puede ser ubicado en el correo electrónico lotus0509@gmail.com y al número telefónico 3003729326.

Atentamente,


JIMENA ARISTIZÁBAL LÓPEZ
Directora General
Dirección Territorial de Salud de Caldas 

Proyectó: Laura Ximena Castro Díaz, Abogada Externa



Certificate No.
IAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co